

Docentes universitarios forzados a impartir en catalán por delaciones

Tras un semestre recabando denuncias de estudiantes, el Govern empieza la persecución

VÍCTOR MONDELO BARCELONA

A inicios del presente curso, el Govern ordenó a las universidades catalanas la elaboración de informes en los que quedarán reflejadas las «incidencias lingüísticas» acaecidas en sus respectivos campus. Dicho de otro modo, les exigió una relación de denuncias contra profesores que emplearan el castellano en sus clases para obligarles a impartirlas en catalán y promover una suerte de inmersión lingüística en la enseñanza universitaria. Transcurrido el primer trimestre, el Govern se jacta de ha-

ber registrado 55 reclamaciones que, «en el 100% de los casos, han sido de estudiantes que habían escogido el catalán como lengua de docencia a la hora de formalizar su matrícula, y que, al iniciar las clases, se vieron afectados por un cambio de lengua».

«En el 60% de los casos verificados se ha podido restituir la lengua de impartición anunciada en el momento de la matrícula», se vanagloria la Consejería de Universidades, admitiendo, de facto, que ya se están usando las delaciones por parte de alumnos que el propio Go-

vern ha promovido para forzar a docentes castellanohablantes a impartir sus materias en catalán.

El Ejecutivo liderado por Pere Aragonès defendió inicialmente que su iniciativa iba encaminada a corregir cualquier disfunción relacionada con la lengua de impartición de las clases, esto es, a detectar tanto a los profesores que debían dar sus materias en castellano cuando se habían comprometido a hacerlo en catalán, como a los que usaban el catalán cuando en la matrícula de la asignatura constaba el castellano como lengua do-

cente. Pero los datos recabados por el propio Govern demuestran que las delaciones sólo buscan señalar a los profesores castellanohablantes, fundamentalmente porque están auspiciadas por sindicatos de sesgo secesionista como el Sindicat d'Estudiants dels

55

Denuncias. Las universidades catalanas han registrado 55 quejas lingüísticas durante un semestre.

Països Catalans (SEPC), que instó a la Generalitat a iniciar esta campaña de persecución contra el castellano en los campus. Después, incluso puso en marcha una web, junto a la Plataforma per la Llengua, para facilitar las denuncias contra docentes castellanohablantes.

Ese mismo sindicato consiguió que el pasado mes de junio los rectores de las ocho universidades públicas catalanas firmaran un compromiso para alcanzar un 80% de docencia en catalán. Ahora, la consejera de Universidades, Gemma Geis, asume ese compromiso como un objetivo a implantar en los grados universitarios, lo que supondría extender la inmersión a los campus. El Govern presentará en abril un «protocolo» para hacer del catalán la lengua «vehicular» del sistema universitario. Una maniobra que avanza en paralelo al diseño de un ardid para sortear la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a impartir un 25% de clases en castellano en todas las escuelas de Cataluña.

Contra el proyecto del Govern se rebela la entidad constitucionalista Universitaris per la Convivència, que manifiesta su «contundente rechazo a la pretensión de la consejera Geis de silenciar a los discrepantes» mediante un «plan de política lingüística centrado únicamente en la protección del catalán (entendido como herramienta de construcción nacional)».

«No aceptamos que exista un problema lingüístico en nuestros campus, donde profesores y alumnos nos expresamos con total normalidad en la lengua que preferimos. Quienes sí podrían generar ese problema son sectores políticos y sociales minoritarios e intransigentes, incapaces de aceptar que vivimos en una sociedad bilingüe que requiere el respeto de los derechos lingüísticos de todos», completa la entidad.

Apuntala la percepción de esta entidad constitucionalista el hecho de que las 55 denuncias contra profesores castellanohablantes recopiladas por la Generalitat durante este primer semestre afectan a un 0,1% sobre el total de asignaturas ofertadas en los diferentes grados y másters en el conjunto del sistema universitario catalán, según datos del propio Govern.



El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, acude a la reunión semanal del Govern flanqueado por el vicepresidente Jordi Puigneró y la consejera Laura Vilagrà. EFE